

críticas a la política de reajuste económico que debió aplicar el gobierno para hacer frente a la importante estrechez presupuestaria heredada del régimen anterior.

En abril, el gobierno envió el proyecto de reforma tributaria, en cuya elaboración se había consultado a los grupos empresariales. Pese a ello, fueron críticos. Tildaron de excesivo el aumento en los impuestos a las utilidades de las empresas, olvidando que hasta la reforma tributaria de 1984 el gravamen que pagaban sobre sus utilidades era superior a los que ahora se proponían; argumentaron que este aumento perjudicaría la inversión, desconociendo los incentivos que el sistema tributario le otorgaba; y que aumentaría la inflación, ignorando la política macroeconómica que acompañaba a la reforma.

La reforma laboral estuvo precedida por un acuerdo tripartito entre el gobierno, empresarios y trabajadores. Las negociaciones, sin embargo, fueron tensas. Sectores de la CUT acusaban que se privilegiarían los intereses de los empleadores, mientras que el empresariado, encabezado por el líder de la CPC, afirmó que “si esta reforma no nos satisface, entonces no invertiremos en el país.”

Otro tema que friccionó las relaciones gobierno-empresariado, tuvo relación con las privatizaciones de algunas empresas públicas. Como era esperable, los empresarios buscaban dar continuidad al proceso iniciado bajo la dictadura, pero el gobierno no se mostró dispuesto a “liquidar el patrimonio público”. La insistencia de los empresarios llegaría a tal punto que, en 1992, durante la gira presidencial a los países de oriente, Hernán Briones G., tras agradecer a Aylwin el éxito alcanzado en la gira, socarronamente le dijo que “ya que estaban tan amigos, porque no le hacía un regalo a los empresarios.” Aylwin incautamente preguntó “¿qué regalo?” y Briones, con una gran sonrisa, le respondió “privatizando Codelco”.

El contexto no era promisorio, menos aún si a los temas señalados se agregaban factores propiamente políticos, como las tensiones con el mundo militar – agudizadas tras la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en abril de 1990- y la latente amenaza de la reactivación del bloque derecha política-militares-empresarios.

Delega en sus ministros generar lazos con empresarios

A partir de agosto de 1990 el gobierno se focalizó en dar claras señales a los agentes económicos respecto de las reglas del juego básicas de la actividad económica. Consciente de la interdependencia entre lo político y lo económico, su objetivo era otorgar confianza, seguridad y estabilidad para generar un crecimiento que permitiera mayor equidad y justicia social.

Entre las acciones que contemplaba esta estrategia, estuvo la de hacer una ron-

“

(Giras presidenciales) también ayudaron a mejorar las relaciones personales entre dirigentes empresariales, trabajadores y políticos; más de ocho horas dentro de un mismo avión, sirvieron al menos para que se disiparan prejuicios”.



La dirigencia empresarial

de la época en una reunión con Aylwin (de izquierda a derecha): Daniel Platovsky (Comercio); José Antonio Guzmán (Construcción); Aylwin; Fernando Agüero (Sofofa); Adolfo Rojas (Banca).

da de invitaciones individuales a los grandes empresarios a tomar un “tecito y horchata” con el presidente en La Moneda. La idea era ir más allá de las relaciones corporativas y protocolares. Se esperaba que los empresarios, mayoritariamente ideologizados y con influencia política, se sintiesen parte de la gestión del gobierno.

El riesgo de esta estrategia era la percepción de que el gobierno cooperaba con el mundo empresarial y no al revés. Desde luego, los trabajadores, que llevaban ya un tiempo negociando con los empresarios y el gobierno las reformas laborales, podían sentir que este último estaba siendo desleal, lo mismo que los sectores más de izquierda de la Concertación.

Una de las fortalezas del liderazgo de Aylwin fue delegar en sus ministros del área económica la tarea de afiatar los lazos más individuales que comenzaban a establecerse con los empresarios. Fue una decisión realista y honesta. Realista, porque Aylwin asumía que, como abogado, carecía de la formación que las circunstancias exigían en temas propiamente económicos. Honesta, porque sabía que al momento de tener que relacionarse más directamente con los empresarios, su historia personal – expresada en la idea de una patria justa y buena – haría que les hablara con un tono más bien crítico, poniendo en riesgo la estrategia de acercamiento que se había diseñado.

Como contrapunto, Aylwin tenía pro-

ximidad con los trabajadores. Su relación con los líderes sindicales Manuel Bustos, María Rozas, Arturo Martínez y Ernesto Vogel, venía de largo tiempo y en los últimos años se había fortalecido. Cuando había dificultades, Aylwin los invitaba a un “tecito y horchata” a La Moneda, logrando que los acuerdos y lealtades primasen por sobre la confrontación y los intereses particulares.

Con el mundo de la Concertación hubo las naturales fricciones y desencuentros propios de una coalición amplia y políticamente heterogénea. Nuevamente el liderazgo de Aylwin fue primordial. Reiteradas veces convocó a La Moneda a los presidentes de partidos, juntos o en forma individual, oficialmente o de forma privada, para revisar conjuntamente los problemas y las posibles alternativas de solución que permitiesen implementar efectivamente el modelo de “crecimiento con equidad”.

Los discursos se endurecen

Pese a que la desconfianza inicial de los agentes económicos había disminuido, especialmente gracias a las alentadoras cifras macroeconómicas alcanzadas hacia fines de 1990, el año 1991 no estuvo exento de fricciones entre gobierno y empresarios. Estos, como colectividad, mantuvieron una postura no gobiernista, pero su opinión era mejor que lo que la derecha política hubiese deseado.

Los acercamientos logrados fueron puestos a prueba cuando el gobierno anunció su decisión de enviar un proyecto de reformas constitucionales que incluían, entre otras, el término del sistema binominal y de los senadores designados.

El discurso en Enade del nuevo líder de la CPC, José Antonio Guzmán, donde advirtió que la tramitación de reformas constitucionales podía crear un clima de inestabilidad que afectaría la economía, evidenció no solo la fragilidad de la relación empresarios-gobierno, sino, las “maniobras de intimidación o chantaje” – como las denominó el entonces secretario general de la Presidencia, Edgardo Boeninger- que el empresariado estaba dispuesto a usar para cuidar sus propios intereses.

Algunas semanas después, Aylwin pronunció un discurso con motivo del segundo aniversario de la elección presidencial. Tras hacer un recuento de los logros alcanzados en materia económica y de destacar que el presidente del FMI señalara a Chile como un país cuya economía era ejemplar, envió un mensaje a los dirigentes empresariales “que viven asustados y anunciando catástrofes que resultan contradichas por los hechos, no nos merecen un gran respeto. Nos parece que son mezquinas o que revelan falta de voluntad y falta de espí-